



El Chile pendiente

Las divisiones internas por la detención del senador Pinochet, las estrategias para lograr su libertad y las declaraciones del padre Raúl Hasbún en contra del Partido Socialista —por citar sólo los hechos más recientes— dan fe de que en nuestro país hay heridas profundas que no cicatrizan. La nascente mesa de diálogo podría ser una alternativa para dar vuelta la hoja, pero aún debe sortear el torpedeo incesante de sus detractores.

Entre críticas, resquemores, divisiones y pocos apretones de manos comenzaron las sesiones de la llamada mesa de diálogo, un intento —tal vez el más serio— por lograr una solución definitiva al tema pendiente de derechos humanos en nuestro país. Aunque muchos presagaban un desenlace prematuro y fallido de la instancia convocada por el ministro de Defensa, Edmundo Pérez Yoma, en sus dos sesiones iniciales, sortando esos malos augurios, el clima que se percibe —por lo menos al interior de la mesa—

ha sido de un creciente optimismo con respecto a su desarrollo.

A la primera reunión, efectuada el sábado 21 de agosto, fueron convocados 21 participantes, entre líderes religiosos y morales, abogados de derechos humanos, oficiales en actividad de las Fuerzas Armadas y Carabineros, personalidades de la cultura y de las ciencias, y asesores del Ministerio de Defensa. Luego se agregarían dos coordinadores, nombrados por Pérez Yoma, con el objetivo de actuar como voceros oficiales de la mesa:

el psicólogo Jorge Manzi (DC) y el abogado Gonzalo Sánchez.

“No hemos llegado aquí a negociar ni a suplir las funciones que le competen a los poderes Legislativo y Judicial”, dijo el ministro Pérez Yoma al dar la bienvenida a los convocados, procediendo luego a exponer las pautas y objetivos de esa cita. Con ello, el Gobierno, a través del titular de Defensa, intentaba dar respuesta al clima de desconfianza provocado por el anuncio del inicio de las conversaciones.

DIVISIONES INOPORTUNAS

La primera de estas desconfianzas provino de la Agrupación de Familiares de Detenidos-Desaparecidos (AFDD), quienes denunciaron una “operación destinada a inhibir la acción de la justicia”, según afirmó a *Ercilla* la vicepresidente de la organización, Mireya García. Después, se sumó un grupo de 34 abogados que llevan juicios de derechos humanos, los cuales, mediante una carta pública, cuestionaron la presencia en la mesa de los juristas Jaime Castillo Velasco, Roberto Garretón, Héctor Salazar y Pamela Pereira.

Nunca antes esa organización había recibido un golpe tan fuerte a su homogeneidad como el asestado a consecuencia de la instalación de la mesa de diálogo. Y todo empeoró cuando se conoció la carta abierta que envió el abogado Jaime Castillo Velasco a la presidenta de esa Agrupación, Viviana Díaz. El emblemático jurista respondió así a la intervención que ésta hizo en un programa de televisión, en que afirmó que el objetivo de la mesa era: “Cerrar la transición a fin de no ocuparse más del asunto”. Castillo dijo que “tales palabras son una suposición de intenciones, una ofensa a muchas personas y una contradicción flagrante consigo misma”. Y agregó con mayor dureza, poco habitual en él: “Usted está solicitando que las Fuerzas Armadas den a conocer los datos que poseen y, al mismo tiempo, en el momento en que se formaliza una conversación con ese fin, se niega a concurrir y descalifica la oportunidad”.

Mireya García fue la encargada de responder. Señaló que no discutirían con Castillo Velasco, “porque no es nuestro estilo polemizar a través de la prensa, y menos con don Jaime Castillo, que es un abogado que ha trabajado en defensa de la vida y los derechos humanos y, por tanto, merece todo nuestro respeto”. No obstante, admitió que se trataba de “una carta injusta”, que no correspondía hacerla pública. “No hemos descalificado a nadie, lo que hicimos fue entregar nuestra opinión respecto de lo que nos parece la mesa”.

¿Y en qué basan sus aprensiones?

—En la forma en que se crea, cómo se da a conocer. Por los no contenidos, los no objetivos, sin plazos, sin condiciones. Esta mesa nace justo cuando los tribunales de Justicia dan señales disíntas a lo que había sido su comportamiento más o menos normal durante veinticinco años. Y además nace aceptando que los militares no tienen información que entregar. Lo obvio es preguntarse ¿para qué se crea una mesa de diálogo si los militares no tienen información

para entregar? Nos resulta más bien una estrategia.

¿Pero no cree usted que hay que aprovechar siempre la instancia del diálogo?

—El concepto diálogo es obviamente bueno, pero el tema aquí no es conceptual ni semántico, es político. Creo que este nombre de mesa de diálogo fue muy bien pensado. Precisamente por las derivaciones que tiene, porque quien no participa, aparece como negándose al diálogo. Aquí no hay que centrarse en si uno está o no por el diálogo, sino en lo que persigue esta mesa, y eso es lograr que finalmente terminemos aceptando lo que probablemente sea un proyecto legislativo para resguardar la confiabilidad de las personas que entreguen información, y que sea aplicada la Ley de Amnistía. Eso es un "punto final". Si lo que vamos a tener es una propuesta de impunidad del Ejército, nosotros no podemos estar allí.

Hay quienes califican su actitud como intransigencia.

—Es fácil descalificar con este tema de la intransigencia. Y más cuando al ministro Pérez Yoma se le ocurre este genial nombre de mesa de diálogo. Pero insisto en que cuando uno está convencido de sus valores y principios, y no se aleja de ellos porque considera que son fundamentales para resolver el problema en lo que llamamos Justicia, esa actitud no tendría por qué ser leída como intransigencia. Es una actitud ética.

Ustedes, ¿hablaron de sus aprensiones con el ministro Pérez Yoma?

—¿Qué bueno que me hace esta pregunta! Lo más insólito de toda esta historia, es que a nosotros—como Agrupación—nadie nos ha invitado oficialmente a participar en la mesa. Las supuestas invitaciones han sido vía medios de comunicación, pero formalmente, ni a través de llamados telefónicos ni a través de una carta hemos sido invitadas.

Las diferencias en el movimiento por



Mientras al interior del edificio Diego Portales abogados de derechos humanos y militares se sentaban frente a frente a escucharse, afuera se daba por desahuciada la mesa de diálogo.



los derechos humanos tiene otras aristas. El día que se desarrollaba la segunda sesión de la mesa—el martes 31 de agosto—, los abogados Hugo Gutiérrez, Julia Urquieta y Fabiola Letelier llegaron hasta las puertas del edificio Diego Portales para manifestar su rechazo a la instancia, y criticaron con dureza a sus colegas que allí estaban. "No somos nosotros los que hemos provocado la división. Son ellos, al avalar esta operación que tiene como objeto la impunidad", declaró Fabiola Letelier. "Con su actitud, están respaldando la estrategia del Gobierno, están siendo utilizados", abundó Julia Urquieta.

Y aunque miembros de la AFDD compartieron algunos momentos de la protesta que desarrollaban los abogados, Mireya García aseguró a *Ercilla*, en ese mismo lugar, que no estaba de acuerdo con los ataques contra los juristas que participaban de la mesa. "Si yo tuviera la convicción de que Salazar o Pereira están negociando algo, lo denunciaría, pero no es así. Hay que man-

tenerse en el respeto, y ellos (Letelier, Urquieta y Gutiérrez) no lo han hecho".

PUERTAS ADENTRO

Pese al contexto negativo con que partió la mesa de diálogo, en su interior las cosas parecen marchar a un ritmo lento, pero seguro. Todavía sin entrar al verdadero diálogo, ya que las primeras cinco sesiones estarán dedicadas a conocer las ponencias de cada participante y a configurar la agenda metodológica de trabajo, las declaraciones de algunos de sus integrantes muestran un moderado optimismo sobre lo que allí puede pasar.

El abogado Héctor Salazar, por ejemplo, manifestó al término de la segunda sesión que había un "feeling" de que está pasando algo importante, y que en ningún caso puede salir algo negativo".

A su vez, la abogada Pamela Pereira, quien mantiene su política de dar a conocer

públicamente su posición, expuso ante la prensa el tenor de su intervención, avalada por el acuerdo de la propia mesa de dejar en completa libertad a sus miembros para referirse a sus dichos. Dijo sentirse conforme con lo que allí adentro estaba pasando. "Se está explorando un camino para tener información. El valor de esto es que civiles y militares se sienten a la mesa. Algo está cambiando en este país". Más tarde, y consultada por *Ercilla* por las críticas de sus colegas, afirmó: "No voy a entrar en polémicas. Yo sólo tengo en la mente seguir adelante para lograr el objetivo de obtener información sobre los detenidos-desaparecidos".

Además de la intervención de la abogada Pereira, en la segunda sesión lo hizo también el general de Ejército Juan Carlos Salgado, quien manifestó el compromiso de las Fuerzas Armadas de participar en este diálogo, haciendo ver la necesidad de contextualizar históricamente los hechos. "Esta mesa debe llevar a mirar como hermanos a quienes antes se miró como enemigos. En esta mesa no pueden haber vencedores ni vencidos", afirmó el uniformado. También expusieron el obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech; el Premio Nacional de Periodismo, Guillermo Blanco, y el historiador Gonzalo Vial.

Los próximos encuentros están presupuestados para el 7, 10 y 14 de este mes, donde expondrá el resto de los integrantes. En una segunda etapa, y según la metodología que se acuerde, comenzarían los diálogos directos, la parte más decisiva de esta instancia que ha venido de menos a más. De resistida, vilipendiada y catalogada como inútil, a medianamente aceptada, respetada y receptora de esperanzas. Lo importante, para su buen fin, es que trabaje con absoluta transparencia. ☐

Annie Kutscher Wach



"Si yo tuviera la convicción de que Salazar o Pereira están negociando algo, lo denunciaría, pero no es así", dijo Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

LA UNIDAD ARTIFICIAL

Hace un año, el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, y el senador vitalicio, Augusto Pinochet, sellaron con un apretón de manos y en la testera de la Cámara Alta, el acuerdo que derogó el 11 de septiembre como feriado, y su sustitución por el Día de la Unidad Nacional, a celebrarse el primer lunes de septiembre.

Este año corresponde a este lunes 6. Es feriado, no hay actividades, pero su esencia—destinarlo a la reflexión y a deponer posiciones extremas para lograr la convivencia pacífica entre los chilenos—no se cumple. Su debut será recordado como un día que, como manifestara un parlamentario, "no tiene sentido".

Tanto así, que nueve diputados de la Concertación, encabezados por Felipe Valenzuela, presentaron el 18 de agosto una moción para derogarlo. A juicio del grupo: "La creación de este nuevo feriado no admite ninguna justificación" y como dijo a *Ercilla* el presidente de la Cámara de Diputados, Carlos Montes, ésta es una fecha "artificial". Objeta que la forma en que resolvió Zaldívar el tema de la eliminación del 11 obedeció a "cambiar peras por manzanas", en una medida "muy poco democrática", en que "todo se acomoda a voluntades más que a sentimientos generales".

"Este 6—concluye Montes—no va a significar mayormente nada. Y el 11 va a tener probablemente connotaciones parecidas". Así, de prosperar la moción de los parlamentarios oficialistas, éste podría ser el debut y despedida del Día de la Unidad Nacional.

Corina Hederra